

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED
WT/WGTGP/W/30
9 de mayo de 2001

(01-2395)

**Grupo de Trabajo sobre la Transparencia
de la Contratación Pública**

Original: francés

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TÚNEZ

Comunicación de Túnez

La Misión Permanente de Túnez ha enviado a la Secretaría la comunicación siguiente, con fecha de 4 de mayo de 2001, solicitando que sea distribuida a los Miembros.

1. Presentación

El objetivo de la contratación pública es satisfacer una serie de necesidades muy variadas, ya sean obras o suministros de bienes y servicios, cuya realización condiciona el crecimiento de las economías y el bienestar de la población. Constituye un desafío financiero importante ya que el volumen total de la contratación pública se estima, según las distintas economías, en alrededor del 10-15 por ciento del PIB.

En Túnez es de un 15 por ciento del PIB y supone casi la mitad del presupuesto del Estado.

No obstante, es preciso subrayar que la contratación pública no constituye solamente un peso financiero importante; representa también un incentivo prioritario para la promoción del sector privado y el desarrollo de los intercambios comerciales.

Para poder garantizar la mejor asignación posible de los recursos financieros disponibles, y a fin de adquirir bienes y servicios competitivos en términos de calidad y de coste, Túnez ha considerado necesario establecer un marco jurídico adecuado definiendo las reglas y procedimientos que deberán seguirse para la celebración de los contratos públicos.

Actualmente el sector de la contratación pública está regulado por un conjunto de textos legislativos y normativos; el texto de base, de 1989, ha sido actualizado periódicamente para tener en cuenta el entorno económico. Esta normativa consagra tres principios fundamentales: el libre juego de la competencia, la transparencia en la atribución de los contratos públicos y el mantenimiento de los principios de buena gestión.

Este dispositivo incluye varios procedimientos: publicidad en los periódicos, envío de las ofertas en plicas selladas, apertura de las plicas, examen detenido de las ofertas, control por las comisiones de contratación, etc. No obstante, por muy numerosos que sean, no se trata de procedimientos muy complejos y responden de hecho a técnicas destinadas a preservar los tres principios mencionados y a garantizar la buena gestión de los fondos públicos y el trato equitativo de los candidatos frente a las adquisiciones públicas.

2. El libre juego de la competencia y la transparencia

La reglamentación no ha olvidado ningún aspecto de estos principios. Ha sometido las compras públicas a la competencia más amplia posible con el fin de garantizar la mejor inversión, tanto desde el punto de vista de la calidad como del precio. Ha considerado la transparencia un principio fundamental íntimamente ligado al libre juego de la competencia, como puede observarse en las distintas fases del proceso de contratación pública.

En lo que respecta a los documentos de licitación, los pliegos de condiciones técnicas deben definir el objeto del contrato y sus condiciones de ejecución. Deben establecer también las condiciones de participación, los criterios de selección y su ponderación e indicar las obligaciones y derechos de las partes interesadas.

Los criterios de selección establecidos por la normativa son el valor técnico de las prestaciones, las garantías profesionales y financieras de los candidatos, el precio, el plazo de ejecución, etc... Los compradores públicos podrán adoptar otros criterios de selección, siempre que se ajusten al objeto del contrato y a sus condiciones de ejecución.

Además, la reglamentación establece que las prestaciones deberán estar expresadas claramente. Las especificaciones y contenido deberán determinarse de forma precisa, haciendo referencia a las especificaciones técnicas previamente establecidas y, en su caso, a las normas nacionales o internacionales indicadas expresamente. Se prohíbe cualquier mención de marca o de elementos que pudieran orientar la adquisición hacia un producto dado.

Respecto a las formas de adjudicación, y para garantizar mejor el libre juego de la competencia y la transparencia, la reglamentación favorece el procedimiento de licitación. Aunque algunas disposiciones permiten el recurso al procedimiento de mutuo acuerdo, se trata de un procedimiento excepcional que sólo se aplica en los casos concretos enumerados en la normativa, como los casos de extrema urgencia debido a circunstancias imprevisibles o las prestaciones en concepto de investigación, ensayo, experimentación, etc.

Incluso en los casos en que se recurre al procedimiento de mutuo acuerdo o por negociación directa, los organismos públicos adquirentes tienen la obligación de permitir en la mayor medida posible el juego de la competencia, a no ser que exista la obligación de dirigirse a un proveedor determinado por motivos justificados.

Además, y siempre en el marco del libre juego de la competencia y la transparencia, la reglamentación impone que los anuncios de licitación tengan la mayor publicidad posible, y puedan llegar a todos los proveedores interesados.

Respecto a las modalidades de envío, recepción y apertura de plicas, la reglamentación tunecina prevé medidas cautelares para garantizar una transparencia total en todas las operaciones de esta fase. Así pues, todas las ofertas deberán enviarse por correo certificado en un plazo indicado en el pliego de condiciones. Dicho plazo, que en ningún caso deberá ser inferior a 20 días, permite informar oportunamente a los posibles licitadores sobre la cartera de licitaciones públicas y les concede tiempo suficiente para prepararse para la competencia y presentar ofertas de calidad. Toda oferta que no cumpla estas condiciones formales o llegue fuera de plazo es rechazada automáticamente.

La apertura de plicas la realiza una comisión, que actúa como órgano colegiado, en presencia del interventor de gestión (el interventor de gastos para los contratos del Estado y el interventor del Estado para los contratos de las empresas públicas) y, generalmente, en presencia de los participantes.

En los casos excepcionales en los que la apertura de pllicas no es pública por razones de urgencia, por ejemplo, el gestor tiene la obligación de exponer en un tablón de anuncios los resultados de la apertura inmediatamente después de la reunión de la comisión.

En lo que se refiere al examen de las ofertas y la selección del proveedor, la reglamentación obliga, por motivos de transparencia, a confiar esta labor a una comisión que procede a analizar las ofertas, eliminando las que no sean conformes, y a clasificar las demás aplicando exclusivamente y de manera rigurosa los criterios de selección y las ponderaciones previstas en el pliego de condiciones, bien entendido que dichos documentos se comunican obligatoriamente a todos los candidatos, los cuales en ninguna circunstancia podrán modificar posteriormente sus ofertas.

Al terminar estos trabajos, la comisión elabora un informe detallado en el que se describen los datos principales del procedimiento de adjudicación de los contratos y propone, habida cuenta de dicha clasificación, la oferta que considera mejor, es decir, la más ventajosa desde el punto de vista de la relación calidad-precio en función de los criterios de selección establecidos previamente.

Hay que destacar que la normativa no sólo pretende establecer grandes principios, como el de la transparencia, y organizar los procedimientos que la consagran, sino también garantizar su buena aplicación mediante un control obligatorio, una de cuyas atribuciones es velar por el respeto de la reglamentación.

3. Sistema de control

Las adquisiciones públicas afectan a los fondos públicos, lo que implica la obligación de rendir cuentas de su gestión en distintas fases de su utilización. La reglamentación prevé, además de un control paralelo por parte de las inspecciones y un control *a posteriori* del Tribunal de Cuentas, un dispositivo de control previo cuyo instrumento principal son las comisiones de contratación. Sobre la base de la sinceridad y la regularidad, la misión del control es sacar a la luz las irregularidades y fallos, antes de que se produzcan, y examinar las diferencias que enfrentan a las partes interesadas.

Estas comisiones están compuestas por miembros que representan a las principales administraciones interesadas en el sector de los contratos públicos.

Las posibilidades de intervención del control preventivo son tan variadas como las fases que se suceden durante el procedimiento de adjudicación de estos contratos, desde la redacción de los pliegos de condiciones hasta el cierre del contrato.

Se trata de un control de naturaleza esencialmente consultiva, ya que adopta la forma de dictámenes fundamentados notificados al Jefe de la Administración o al Presidente o Director General de la empresa pública de que se trate.

4. Impugnación y solución de diferencias

De conformidad con la reglamentación, todos los problemas, impugnaciones o diferencias deberán presentarse ante la comisión de contratación pública competente, que examina las reclamaciones y la posición de cada una de las partes, de conformidad con la reglamentación y emite un dictamen fundamentado.

Si persistiese la diferencia, podrá solucionarse amistosamente ante un comité *ad hoc* presidido por un miembro del Tribunal Administrativo e integrado por el representante de la profesión y el de la Comisión Superior de Contratación Pública. Este comité concilia los puntos de vista de ambas partes y propone la solución que le parece más adecuada en equidad.

Si las partes no aceptan la solución amistosa del comité, cada una de ellas podrá recurrir al arbitraje o acudir a los tribunales.

5. Fomento de la producción nacional a través de la contratación pública

Debido a la diversidad de sectores que implican, a la importancia del volumen de fondos públicos que supone y a su incidencia sobre los mecanismos de producción, la contratación pública constituyen también un instrumento de intervención del Estado en la economía.

Con esta idea, y a semejanza de los sistemas de otros países, la reglamentación en materia de contratos públicos ha previsto una serie de medidas para fomentar la industria nacional, invitando a los proveedores extranjeros, si se trata de un anuncio de licitación internacional, a asociarse con empresas tunecinas o a garantizar una subcontratación local óptima.

A este respecto, hay que subrayar que los organismos internacionales y los proveedores de fondos, como el Banco Mundial, aceptan la asociación y la subcontratación y conceden a los productos nacionales un tipo preferencial del 15 por ciento.

En el contexto actual, caracterizado por la globalización de los intercambios y la apertura de los mercados, la reglamentación tunecina en materia de contratación pública tiene prevista una reducción progresiva del margen de preferencia a favor de los productos de origen tunecino, que se suprimirá totalmente a partir del año 2004.

Finalmente, no puedo terminar esta exposición sin mencionar las medidas más recientes adoptadas por Túnez para reforzar la transparencia y la eficacia del sistema de contratación pública, medidas que se dirigen al establecimiento de instrumentos eficaces de información y gestión mediante el recurso a las tecnologías de la información y la oferta de la formación necesaria para el conjunto de los agentes implicados en la contratación pública.
